

## RUMANÍA

### COMENTARIO GENERAL

---

#### Situación política

La resolución de la crisis parcial de gobierno llevada a cabo a principios del mes (ver reseña informativa anterior) lejos de aclarar el panorama político, ha terminado por volverlo más confuso. Mientras que por un lado se han multiplicado los rumores sobre las desavenencias entre el Presidente Basescu y el Primer Ministro Emil Boc (que según los comentaristas se habría reflejado en la ausencia de consenso entre ambos para llevar a delante la crisis) por otro, se perfilan con más nitidez las diferencias entre las diversas “familias” en el seno del PDL.

La facción “histórica”, que ha gobernado el Partido hasta ahora, y que encabezaban los ex –ministros Videanu y Berceanu (Economía y Transportes) ha quedado definitivamente relegada con la dimisión del Ministro del Interior, Vasile Blaga, producto de una confusa situación aún no aclarada suficientemente y sobre la que volveremos más adelante.

Los primeros actos de la nueva Ministra de Transportes e Infraestructuras (y antigua Ministra de Integración Europea) Anca Boagiu se parecen más a un ajuste de cuentas o a una operación de “acoso y derribo” del ex - Ministro Berceanu, con la dimisión decretada o provocada de casi toda la cúpula de la Compañía Nacional de Carreteras. La labor de esta institución, que tiene como cometido la planificación y ejecución de la red de comunicaciones del Estado vienen siendo quizá la más criticada desde hace años por su absoluta inoperancia, siendo de hecho el eje de desarrollo que cuenta con la más baja absorción de fondos europeos (en torno al 1,5%). Lo que piensan los comentaristas es que esta situación podría haber sido aprovechada por la nueva ministra, no sólo para reajustar la actividad de uno de los sectores de mayor importancia para el desarrollo del país, sino de paso para llevar a cabo una operación de descrédito del anterior ministro.

Otro elemento de esta supuesta labor de neutralización ha venido dada por el ingreso en el PDL del hasta ahora

En cuanto a las otras facciones del PDL, parece que está consiguiendo tomar más fuerza la encabezada por la Ministra de Turismo, Elena Udrea, cada vez más identificada con la línea del Presidente y según los medios, “factotum” del mismo. La tercera facción, la de los liberales e intelectuales del partido, Cristian Preda y Voinescu Sever, parece llevar camino de quedarse en una simple referencia moral – intelectual, pero sin capacidad real de ofrecer una alternativa de liderazgo dentro del PDL.

Desde el punto de vista de la oposición, y particularmente del PSD, el objetivo sigue centrado en la expulsión del Presidente mediante un procedimiento de “impeachment” que ya fracasó hace tres años. La percepción de la situación en la opinión pública ha cambiado mucho desde entonces, registrando la popularidad del primer mandatario sus momentos más bajos, debido a las medidas de recorte del Gasto

público emprendidas por el gobierno en los últimos meses, y respecto a las que aquél aparece como el más enérgico inspirador y soporte.

El PSD, en coalición con el PNL tiene previsto iniciar el procedimiento mediante la presentación de una moción de censura a mediados de octubre. Un argumento más para justificarla vino servido en bandeja como consecuencia de la aprobación por la Cámara de Diputados de la controvertida Ley de Reforma de las Pensiones, en medio de un escándalo mayúsculo en el que pudo verse que el recuento de votos registrado por la presidenta de la Cámara Roberta Anastase (PDL) sumaba un número mayor del de los diputados presentes en la sala en ese momento. El líder del PSD, Víctor Ponta acusó a la presidenta de fraude y amenazó con pedir la destitución del Jefe del Estado si se le ocurría sancionar la Ley. Finalmente, y sin entrar en el asunto del supuesto fraude, el Presidente resolvió devolver el proyecto a las Cámaras a fin de modificar un detalle menor referente a la edad de jubilación, pero esto no ha hecho sino reavivar la polémica sobre el conjunto de la reforma, que entre tanto sigue sin ser aprobada. En este sentido, el Presidente del Senado anunció que las Cámaras no se iban a limitar a discutir los puntos sugeridos por el Presidente al devolver el proyecto al Parlamento.

Un elemento importante de la política internacional que afecta a Rumanía, aunque solo fuera por la repercusión internacional que ha tenido y que está teniendo, es la decisión del gobierno francés de continuar con las expulsiones de gitanos de nacionalidad rumana establecidos en aquel país. Aunque de hecho esta política de expulsiones se está llevando a cabo al menos desde hace unos cinco años (solamente en el 2009 se expulsó a cerca de 9.000 personas) el asunto saltó a los medios y provocó una reacción internacional de repulsa generalizada cuando fue anunciada “a bombo y platillo” por el propio presidente Sarkozy en el mes de julio pasado, como complemento a otras medidas de mayor calado referente a la conservación de la nacionalidad francesa por parte de aquellos extranjeros que la hubiesen adquirido. Esta polémica internacional alcanzó su momento más crítico al revelarse en los medios de comunicación una circular del Ministerio del Interior francés que se refería de manera explícita al colectivo de gitanos de nacionalidad rumana.

Lo cierto es que Rumanía jamás había protestado por las expulsiones que se han venido llevando a cabo en los últimos años. Más aún, al estallar la polémica en el mes de julio, el gobierno demostró una pasividad que sorprendió en los medios internacionales, pero que no pareció despertar serias críticas en el interior del país. Tan solo las ONG gitanas acusaron al gobierno de abandonar a sus connacionales de etnia gitana. La posición de apoyo a la coalición gubernamental mantenida por el Partido de los gitanos (Partido Romilor) que tiene un representante en el Parlamento, tampoco propició una crítica demasiado decidida contra el gobierno. Tan sólo el asesor del Ministro de Asuntos Exteriores para los asuntos de los nacionales de etnia gitana, anunció públicamente su renuncia como protesta por la pasividad demostrada por el gobierno en defensa de la minoría.

El criterio del gobierno rumano ha sido el de que este asunto no perjudicase a la relación bilateral con Francia. En este sentido, aún manteniendo una crítica formal formulada sin mucho entusiasmo y aun

manteniendo que las expulsiones tienen un carácter general y étnico incompatible con el acervo comunitario, no parece que el gobierno vaya a pasar de ahí.

Para prevenir un deterioro de la relación bilateral, el Ministro de Inmigración J. Besson y el Secretario de Estado P. Lellouch se reunieron en Bucarest durante el mes de septiembre con los ministros de Trabajo rumano, Botis, el de Exteriores, Baconschi y el Secretario de Estado Valentin Mocanu. Al término de esta reunión se firmó una declaración que reconoce los puntos de vista de Francia en este asunto, a saber, que la libertad de circulación en el territorio de la Unión no supone un derecho sin límites y que Rumanía se compromete a elaborar, de aquí a fin de año, un plan nacional de inclusión de la minoría de etnia gitana. Como contrapartida, Francia se compromete a cooperar con Rumanía en la integración de esta población. Con esto, queda de alguna manera trastocada la aspiración de Rumanía a transformar el problema de la minoría gitana en un asunto comunitario. Esta es la tesis que ha venido manteniendo ante las autoridades de la Unión y que hicieron declarar al Presidente Basescu, a la salida del Consejo Europeo que tuvo lugar en Bruselas durante el mes de septiembre, su satisfacción al comprobar la coincidencia de opiniones de todos los jefes de estado o de gobierno allí presentes en el sentido de que el problema de la minoría gitana era un problema supranacional. Esta coincidencia teórica no parece operar, por el momento, en la dirección de las aspiraciones rumanas.

### **Situación económica**

A pesar de los optimistas anuncios del Gobierno, Rumanía no parece ser capaz aún de remontar la crisis. La Comisión Nacional de Pronósticos (CNP) anunció en septiembre que Rumanía alcanzará un crecimiento global en el 2011 en torno al 1,5% del PIB, siendo los sectores de la Agricultura, la Construcción y los Servicios los que en mayor medida contribuirán a dicho crecimiento. El incremento de la inversión alcanzará un 3%, el déficit por cuenta corriente será de un 5,5%, el desempleo un 7,6% (después de alcanzar una tasa del 8% en el 2010) y la inflación será de un 3,2%, tras alcanzar el 7,9% en el 2010.

Sin embargo, estas previsiones de crecimiento o, al menos de “impasse” se han venido anunciando durante todo el 2010, aunque después se han alargado en el tiempo sin llegar a concretarse. El FMI, tras la reciente reunión en Washington de su órgano central, ha declarado que Rumanía seguirá registrando un decrecimiento en torno a un 2% en el 2010, aunque espera una recuperación en el 2011, que no llegó a concretar. Otras señales inquietantes se reciben de diferentes instancias. A mediados de septiembre, los medios se hicieron eco de las dificultades del gobierno en colocar su deuda y la creciente falta de ltnez de las inversiones extranjeras.

Según datos del Banco Nacional de Rumanía, en el periodo comprendido entre enero y julio de 2010, la Inversión Extranjera Directa (IED) bajó un 36% con respecto al mismo periodo de 2009, hasta 1.900 millones de euros. Durante el mes de julio de 2010 la IED bajó hasta 71 millones de euros, en comparación con los 390 millones que se registraron en el mismo mes del año 2009. La bajada de la inversión extranjera se considera una mala noticia, ya que de este modo la única fuente autónoma de financiación de la

economía se está debilitando, en un momento en el que los bancos no conceden créditos fácilmente y el estado no puede aumentar los gastos. Ionut Dumitru, presidente del Consejo Fiscal, declaró que el Estado tiene que atraer a los inversores realizando reformas estructurales y no a través de impuestos más reducidos o a través de incentivos, porque la economía no puede soportar tales medidas.

La sintonía reflejada hasta ahora entre el gobierno y la autoridad monetaria nacional parece empezar a resquebrajarse. En un seminario organizado recientemente por el Banco Nacional de Rumanía, las autoridades del mismo no se han contenido en criticar la política fiscal del gobierno. Aunque los ponentes, empezando por el Gobernador del Banco, Mugur Isarescu, y siguiendo por otros altos cargos manifestaron que tan sólo estaban expresando opiniones personales, parece haber quedado claro que la autoridad monetaria está empezando a perder su sintonía con el gobierno de Emil Boc. Entre otras conclusiones, los ponentes criticaron el incremento de la presión fiscal en un momento en que la respuesta de cualquier manual sería la de relajarla, para permitir a los agentes económicos actuar en contra de la crisis.

Otro punto conflictivo parece que puede surgir en torno a la decisión sobre la solicitud de un nuevo préstamo al FMI, que ha sido enérgicamente criticada por el Gobernador del Banco. El nuevo acuerdo, sin embargo, según declaraciones del Jefe de la Misión del FMI en Rumanía, Jeffrey Franks, sería más bien el de negociar una línea de crédito que se pondría a disposición del gobierno, pero que sólo se utilizaría en caso de surgir una situación de emergencia.

Sin embargo, el gobierno no sólo parece no estar de acuerdo con las críticas a su política fiscal, sino que ya anunciado que se mantendrá la presión (las diversas opciones de rebajar el IVA en algunos productos no han prosperado) y las medidas de recorte del gasto deberán seguir en el 2011. Con ocasión de la intervención del Presidente Basescu en el Parlamento para pedir la aprobación de la Ley de reforma de las pensiones, el primer mandatario anunció que aún aprobándola, el déficit público ascendería en el 2010 a tres mil millones de euros, pero que de no aprobarse, se alcanzaría al menos los cinco mil millones.

Basescu, asimismo declaró que la actual estructura presupuestaria del Estado impide la posibilidad de hacer inversiones, ya que todo el dinero se va en ayudas sociales. En el 2004, un total de 6,4 millones de personas recibieron asistencia social, mientras que en el 2008, durante el gobierno del PNL, esta cifra ascendió a 13,9 millones. El 43% del Presupuesto se va a la Seguridad Social, y el 30% para pagar a los funcionarios. El Presidente añadió que “el Estado no puede seguir subvencionando a funcionarios incompetentes, a personas con enfermedades imaginarias o a aquellas que se encuentran perfectamente bien pero que simplemente no tienen ganas de trabajar”.

En consecuencia, la recuperación de los ingresos de los empleados públicos anunciada para el 2011 queda en el aire, y la congelación y gravamen de las rentas de las pensiones parece que será realidad a partir de enero del año próximo.

## Situación social

La política de recortes sociales del gobierno ha desatado durante el mes de septiembre el comienzo de las mayores movilizaciones que se recuerdan desde la revolución de 1989.

Todos los sectores, sin excepción, han salido a la calle y se han manifestado en contra del gobierno. La prudencia o inseguridad de los sindicatos, ha hecho que las manifestaciones hayan seguido un calendario escalonado, en lo que parece el comienzo de un pulso al gobierno que podría desarrollarse por etapas, alcanzando, entre octubre y noviembre, su máxima virulencia.

Las grandes centrales sindicales, Cartel Alfa, BNS, CNSRL Fratia y 'Meridian', convocaron a sus afiliados a partir del 15 de septiembre y los hicieron manifestarse frente a la sede del Gobierno en Plaza Victoriei.

En el desarrollo de las protestas, como ya se ha dicho, se ha observado, sin embargo, una cierta desunión en las convocatorias, aunque los comentaristas no descartan que la propia dinámica de las protestas pueda llevar a una protesta final generalizada. Para dar una idea de la magnitud de las protestas, diremos que la primera concentración tuvo lugar a cargo de CNSLR-Fratia, a la que siguió una marcha de la Federación "Sanitas". CSDR, que tenía prevista otra concentración, que fue sin embargo desconvocada en el último minuto al recibir la promesa del Primer Ministro de volver a abrir negociaciones, pero que acabó celebrándose finalmente al no dar fruto las negociaciones. Por su parte, Cartel Alfa convocó otra jornada procurando no coincidir con las otras convocatorias. Pero sin duda, el episodio más grave lo constituyó la concentración de los funcionarios de los cuerpos de policía y de instituciones penitenciarias. Los primeros ya habían protagonizado una jornada en la que se negaron a dirigir el tráfico y poner multas y a comparecer en las causas civiles ante los tribunales.

La concentración agrupó a más de seis mil policías, ante el Palacio del Gobierno. Sin embargo, se decidió a continuación marchar hacia el Palacio de Cotroceni, residencia del Jefe del Estado, aún sin haber sido autorizada. Los manifestantes lanzaron huevos y objetos contra la residencia presidencial y tuvieron que ser contenidos por una fuerza antidisturbios desplegada en el último momento.

Varias han sido las consecuencias de estos disturbios. Por una parte, tanto el Presidente Basescu como el Primer ministro Emil Boc decidieron en señal de protesta prescindir de su escolta policial. A renglón seguido, se produjo la inesperada dimisión del Ministro Vasile Blaga, el único representante de la facción "histórica" que había quedado en su puesto tras la reciente remodelación del Gobierno. Algunos comentaristas han señalado que Basescu se ha aprovechado de estos incidentes para obtener un cese, el del Ministro, que no pudo conseguir a principios de septiembre y que, supuestamente, habría sido causa fundamental de su desavenencia con el Primer Ministro.

Por su parte, BNS y CNSLR prepararon una jornada conjunta para el 28 de septiembre y el 5 de octubre. Por su parte, la Asociación de conductores independientes anunció una huelga contra la decisión del

Ministerio de Sanidad de obligarles al pago retroactivo de las contribuciones sociales de los últimos cinco años. El objetivo de las protestas sindicales persigue obligar al gobierno a renunciar a las medidas de austeridad, devolver los salarios de los empleados públicos al nivel de diciembre del 2009, a partir del 2011, fijar el salario mínimo en 750 ron (180 euros) y mantener el sistema actual de cálculo de la base reguladora de las pensiones.

Las protestas tendrán su continuidad en meses posteriores, destacando la prevista de los enseñantes, los jubilados y otros sectores que, por primera vez, han coincidido en su repulsa por la política del gobierno.